

**Corrientes. Aplicación del protocolo adicional de Convenio Multilateral.  
Falta de comunicación a otros fiscos afectados**

PARTE/S:	FIRST DATA CONO SUR SRL C/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES (DIRECCION GENERAL DE RENTAS) S/ RECURSO FACULTATIVO (ACCION DE NULIDAD)
TRIBUNAL:	Sup. Trib. Just. Corrientes
SALA:	-
FECHA:	12/03/2024
JURISDICCION	Corrientes

---

En la ciudad de Corrientes a los doce ( 12 ) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, estando reunidos los señores Jueces Subrogantes de los Sres. Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Gustavo S. Sánchez Mariño, Diego Roberto Núñez Hüel, Ana del Carmen Figueredo y Juan José Cochia con la Presidencia en la presente causa de la Doctora María Eugenia Sierra de Desimoni, asistidos del Secretario Jurisdiccional, Doctor Juan Manuel Rodríguez, tomaron en consideración el Expediente N° EXP 108283/14, caratulado: "FIRST DATA CONO SUR SRL C/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES (DIRECCION GENERAL DE RENTAS) S/ RECURSO FACULTATIVO (ACCION DE NULIDAD)". Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores María Eugenia Sierra de Desimoni, Gustavo S. Sánchez Mariño, Diego Roberto Núñez Huel, Ana del Carmen Figueredo y Juan José Cochia.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE CUESTION:  
¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA EN LA PRESENTE CAUSA, DOCTORA MARIA EUGENIA SIERRA de DESIMONI, dice:

I.- El Superior Tribunal de Justicia dictó, el 15 de agosto de 2018, la sentencia 45 declarando inadmisibile el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones con competencia administrativa y electoral que al desestimar su recurso de apelación, mantuvo la decisión de primera instancia que había rechazado la demanda promovida por First Data Cono Sur S.R.L. (fs. 202/204).

Contra dicho fallo esa parte dedujo recurso extraordinario federal a fojas 207/220 vuelta, sustanciado según constancias de fojas 221 y 224/235, que éste Tribunal no concedió en el entendimiento que las cuestiones debatidas se agotaban en la jurisdicción local sin posibilidad de revisión por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Res. 122 del 3/6/2019, fs. 238/239 vta.), motivando la interposición de la queja por recurso extraordinario denegado. (fs. 265/323).

La Procuración General de la Nación emitió dictamen opinando que la queja era admisible y el Máximo Tribunal hizo lugar a la misma y declaró procedente el

recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia definitiva y devolvió los presentes actuados para que, quien corresponda, dicte un nuevo fallo con arreglo a lo resuelto.

En este estado, cabe entrar al examen de las cuestiones indicadas por la Corte Suprema al ordenar el reenvío de la causa, es decir, la prescripción liberatoria del reajuste de la obligación tributaria correspondiente al periodo enero de 2002 a marzo de 2005; la aplicación del Protocolo Adicional del Convenio Multilateral al hallarse – según la actora - cancelada en otra jurisdicción, la obligación exigida por el fisco correntino y la extinción también de la acción para aplicar multa.

## II.- De la prescripción.

Respecto a esta cuestión, está claro que no podemos soslayar el pronunciamiento del Máximo Tribunal de la Nación de fecha 4 de marzo de 2021 en la causa "Gobierno de la Provincia de Corrientes c/APALA S.R.L. y/o Victoria Carboni y/o Colombini Enrique s/Apremio" (<https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=762568>), que remite, en rigor, al precedente "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903), donde se reitera que la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, justificando que el Congreso Nacional en ejercicio de la habilitación conferida por el art. 75, inciso 12 de la Constitución Nacional estableciera un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía, aplicable de manera uniforme en toda la república a la prescripción de las obligaciones tributarias locales tanto en lo relativo a sus plazos, como al momento de su inicio, y a sus causales de interrupción o suspensión.

Razón por la que corresponde señalar, en primer lugar, que los hechos del caso no deben ser juzgados, como se hizo en el fallo de primera instancia, luego confirmado, a la luz del Código Fiscal de la provincia. Pero tampoco del Código Civil y Comercial, como también se hizo en dicho fallo, sino de conformidad con la legislación anterior, pues la deuda tributaria de los períodos fiscales 2002 a 2008, reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos se constituyó y tornó exigible bajo la vigencia del código anterior. En efecto, su determinación se realizó oficiosamente varios años antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, mediante Resolución 825/10 de la Dirección General de Rentas, ratificada por resolución 1045/11 que rechazó el recurso de revocatoria en su contra y Decreto 1369/14 que denegó la apelación, de manera tal, que el plazo de prescripción para reclamar el ingreso de aquel tributo, se inició y transcurrió durante la vigencia del código anterior (fs. 35/58). Y claramente además, del Convenio Multilateral sobre el impuesto a los Ingresos Brutos y Protocolo Adicional del mismo.

Tal obligación surge de la responsabilidad que nos cabe como magistrados, integrando en este caso el Superior Tribunal de Justicia y los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (Fallos: 342:2344).

Sentado ello, debemos entrar al examen de la prescripción liberatoria, que, sabido es, no puede separarse de la causa de la obligación jurídicamente

demandable. (Fallos: 321: 2310 y su cita; 340:1680 entre otros.

Para resolver esta cuestión, nos remitimos al criterio sostenido en la sentencia 132 dictada el 23 de septiembre de 2021, en el EXP - 118146/15 caratulado: "GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES C/ APALA S.R.L. Y/O VICTORIA CARBONI Y/O COLOMBINI ENRIQUE S/ APREMIO", oportunidad en que también integramos el Superior Tribunal de Justicia.

Allí, en el voto fundante de la mayoría se memoró que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la causa A. 72.756, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c. Necotrans S.A. y otros s/ Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" (LA LEY 06/05/2021) se había expedido sobre un caso análogo sosteniendo que para determinar el inicio del plazo liberatorio de las obligaciones cuestionadas, debe estarse a lo normado por el citado art. 3956 del Cód. Civil -entonces vigente-, el que establece que: "...comienza a correr desde la fecha del título de la obligación". En esa línea, se dijo entonces, que correspondía computar el término prescriptivo desde el vencimiento de la obligación, conforme lo dispuesto por el art. 3956 del Cód. Civil -vigente a la época de los hechos debatidos-, resultando que el plazo comenzó a correr el primer día hábil posterior al vencimiento de cada anticipo mensual reclamado.

En el caso concreto que ahora nos ocupa, nuevamente, el fisco reclamó determinadas sumas mensuales adeudadas, con más sus intereses desde la fecha consignada para cada uno de los períodos identificados, por lo que, resulta lógico aplicar igual solución.

Opuesta entonces, en la demanda, la prescripción de las diferencias determinadas respecto de los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes a los meses de enero de 2002 a marzo de 2005 inclusive, si nos atenemos a las fechas de vencimiento de los plazos para el pago de tales anticipos, fijados año a año por la Comisión Arbitral, resulta procedente.

Según Resolución General 108/04 de la Comisión Arbitral, el plazo para el pago del anticipo correspondiente al mes de marzo de 2005 - último período prescripto para la actora - vencía el 14 de abril de 2005, por lo que, si computamos a partir del día hábil inmediato siguiente, a la fecha del dictado de la Resolución 825 el 27 de abril de 2010 (cuya fecha de notificación no consta en autos) que determinó la deuda en concepto de diferencias de ingresos brutos e importó, por tanto, una verdadera interpelación al pago, los cinco años previstos por la norma aplicable, habían transcurrido inexorablemente. Huelga destacar, que los períodos posteriores no se hallan prescriptos, porque la constitución en mora mediante Resolución 825/10 suspendió por un año aquel plazo y reanudado, no llegó a transcurrir en forma íntegra, habiendo la parte efectivizado el pago para habilitar la vía recursiva el 24 de mayo de 2011, como ella misma afirma en su demanda (fs. 2) y obtenida la decisión definitiva (Dto. 1369/14) promovió, de inmediato, la presente causa.

III.- De la aplicación del Protocolo Adicional del Convenio Multilateral de Ingresos Brutos y sus efectos.

En este estado, subsistiendo la pretensión fiscal por los períodos no prescriptos, esto es, del anticipo de abril de 2005 al de agosto de 2008, resulta necesario examinar la cuestión relativa al Protocolo Adicional del Convenio Multilateral. Veamos.

A) La actora expuso desde el descargo efectuado en sede administrativa, frente a la Corrida de Vista 132/2008, que la pretensión fiscal de pago de diferencias en concepto de ingresos brutos correspondientes a los periodos enero de 2002 a agosto de 2008 se basaba, exclusivamente, en un ajuste del coeficiente unificado para la distribución de la base imponible de ingresos brutos entre todas las jurisdicciones, tomando en cuenta el lugar de producción de efectos de la actividad de procesamiento de datos desplegada por la compañía (expte 123-2402-02775/2015, fs. 848/856 y 836/84 respectivamente). Reajuste efectuado, según se menciona en el acto determinativo, por aplicación de la Resolución 3/2006 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, resolviendo el planteo efectuado por la Provincia de Córdoba respecto de la actora.

Cierto es, que afirmó haber cancelado el total de la suma determinada en concepto de ingresos brutos y atribuida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por lo que, el reclamo de la Provincia de Corrientes, en el caso, insiste, debe ser satisfecho mediante la compensación entre fiscos deudor – CABA - y acreedor – Corrientes - como ordena el Protocolo Adicional.

Mismo motivo por el que, agregó, no podían exigirse intereses ni aplicarse multa.

Está claro, como se advierte en el dictamen al que remite el Máximo Tribunal, que la Dirección General de Rentas Provincial al responder aquel descargo de la actora a la Corrida de Vista 132/2008, sostuvo que hasta tanto quedara firme la determinación de deuda se hallaba impedida de aplicar el Protocolo Adicional y tampoco estaba obligada a notificar aquella a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni a citarla al procedimiento (Res. 825/2010, fs. 48/58).

La afirmación efectuada en el fallo de primera instancia de que el protocolo se “habría aplicado”, no tuvo en cuenta, atento lo observado en la instancia extraordinaria federal, la prueba documental generada por la misma administración, ofrecida en esa instancia por ambas partes y debidamente incorporada por la actora. Prueba también omitida en su análisis, por Cámara primero y el Superior Tribunal de Justicia después.

Cuestión conducente para la correcta solución del litigio pues, como bien sostuvo la Corte Suprema de Justicia en Fallos 334:1472 y otros en esa línea que reiteró en la presente causa, si se hubiera aplicado el Protocolo Adicional y efectuado la notificación prevista en el punto 2 del artículo 1º del mismo, aun en el hipotético supuesto que se desestimara el reclamo de la firma actora y el fisco ajeno – en el caso CABA - hubiese prestado conformidad con la determinación de la DGR, esta (la actora) no hubiera tenido que pagar en efectivo – como efectivamente hizo - sino que los fiscos involucrados deberían haber compensado las sumas atribuidas y pagadas en exceso a uno de ellos, en detrimento del otro.

Máxime, considerando que: “Las leyes-convenio entre la Nación y las provincias hacen parte del derecho local; esa condición asumen en el campo del derecho público, de modo que su violación colisiona, en primer término, con el plexo normativo provincial, y tal circunstancia excluye la cuestión de la materia exclusivamente federal.” (Fallos: 327:1789)

Entrando entonces a su examen, por el período señalado, caben las siguientes consideraciones.

Debe tenerse presente, en primer término, que ambas partes son contestes en que las diferencias del impuesto que se han determinado, hallan sustento en la atribución por defecto – no por omisión - de la base imponible atribuida a la jurisdicción local (art. 1º, PACM), con lo cual, no existe óbice para la aplicación del Protocolo Adicional, centrándose el debate, precisamente en este punto.

Conforme la Resolución General 1/2008, ordenatoria del régimen aplicable, cuando un fisco inspecciona a un contribuyente alcanzado por el Convenio Multilateral, sea en su propia jurisdicción o en otra, debe hacerlo saber a las demás jurisdicciones involucradas a fin de que las mismas, si así lo deciden, puedan actuar en forma conjunta. (art. 91 -Fuente: Resolución General 62/95, reitera texto del art. 86 de la RG 1/07) Deber que, según denuncia la actora, no se cumplió.

Frente a dicha exigencia, la DGR argumentó en sede administrativa y en estos autos, que para actuar en consecuencia, la determinación debía estar firme. El texto del art. 24 y sgtes del Protocolo Adicional regulado por RG 1/2006 (normativa vigente en el momento de los hechos y aplicada por DGR), reiterado en el art. 26 y cc. del RG 1/1007 establece que en los casos en que, por fiscalización, surjan diversas interpretaciones de la situación fiscal de un contribuyente sujeto al Convenio, y se determinen diferencias de gravamen por atribución en exceso o en defecto de base imponible, entre las jurisdicciones en las que el contribuyente desarrolla la actividad, se debe proceder, una vez firme la determinación y dentro de los quince (15) días hábiles, a poner en conocimiento de las restantes jurisdicciones involucradas el resultado de la determinación practicada, expresando detalladamente las razones que dieron lugar a las diferencias establecidas. Y los fiscos notificados deberán contestar al fisco que llevó a cabo el procedimiento, manifestando su conformidad a la determinación practicada dentro de los treinta (30) días hábiles de haber recibido la comunicación respectiva; su falta de respuesta será considerada como consentimiento de los mismos a la determinación practicada y, en caso de existir disconformidad por parte de alguna o algunas de las jurisdicciones, ésta o éstas deberán comunicar al fisco iniciador, siempre dentro del plazo fijado en el punto 2, que someterán el caso a decisión de la Comisión Arbitral (artículo 24, inciso b ) del Convenio (El subrayado nos pertenece).

La omisión de tal procedimiento es lo denunciado por la actora, manifestando que el recaudo estaba cumplimentado, habida cuenta de que la determinación efectuada por la Provincia de Córdoba estaba firme. Sin embargo, no puede soslayarse, que las diferencias aquí determinadas solo se superponen con las determinadas en aquella jurisdicción – enero de 1998 a octubre de 2002 – en los períodos de enero a octubre del último año (2002).

Basta leer la Resolución 825/10, determinativa de la deuda, para comprobar, que la DGR local dispuso la notificación fehaciente de la determinación de deuda que afectaba la distribución interjurisdiccional, en los términos previstos en el art. 87 de la RG 1/2006.

Caben dos observaciones, la primera que, en mérito a dicho texto ordenatorio, la firmeza de la determinación efectuada por la Provincia de Córdoba, en todo caso, solo alcanzaba a las diferencias correspondientes a los períodos superpuestos, es decir, de enero a octubre de 2002, precisamente, diferencias acerca de las que, al momento de su determinación, había prescripto el derecho

del fisco correntino a reclamar; la segunda, que si bien se invoca el art. 87, que, en rigor, compele a la DGR en el caso de proceder a fiscalizar un contribuyente alcanzado por el Convenio Multilateral, a comunicar a las demás jurisdicciones involucradas, para que, sí lo deciden, puedan actuar en forma conjunta, dado que se trata del acto administrativo determinativo, debió citar el art. 88, considerando que, se trata ya del acto determinativo, dictado como corolario de la fiscalización y la notificación así ordenada, no tiene por objeto una fiscalización conjunta, sino, la mera posibilidad de controvertir la determinación efectuada unilateralmente y presentar el caso, si lo entendieren necesario, a la Comisión Arbitral. Notificación cuyo efectivo cumplimiento tampoco se ha demostrado en autos.

Está claro que la pretensión del fisco correntino respecto al período no prescripto, aunque las diferencias fueran también determinadas en base al criterio sentado por la Comisión Arbitral en su momento, al analizar la Resolución 3/2006 entre los papeles de trabajo, podía, eventualmente, colisionar con las pretensiones de los restantes fiscos. Tal eventualidad, ameritaba la notificación de la fiscalización oficiosa de la DGR de Corrientes, a las autoridades fiscales de las restantes jurisdicciones, a los efectos establecidos en el Protocolo Adicional y el invocado art. 87 de la RG 1/2006.

Consecuentemente, la sistemática negación de la provincia de comunicar a las restantes jurisdicciones la fiscalización en curso, incumpliendo el protocolo, no solo determinó la nulidad del acto determinativo por falta de procedimiento y, obviamente, afectación del derecho de defensa, sino que resultó gravosa para la actora, considerando que, por el principio solve et repete debió pagar el monto reclamado para poder agotar la vía recursiva provincial y accionar judicialmente después.

En el hipotético supuesto que, aplicado el protocolo, la jurisdicción en cuestión - CABA - hubiera admitido la percepción del tributo en exceso, durante el período por el cual Corrientes reclamó diferencias, dichas sumas deberían haberse compensado entre ambos fiscos, con arreglo a lo prescripto por el régimen aplicable.

Ahora bien, el análisis se circunscribirá a las pretensiones de nulidad del acto determinativo de deuda y los dictados en su mérito, y devolución de la totalidad de las sumas pagadas por la actora, con más los intereses correspondientes.

En ese cometido, está claro que, el señalado incumplimiento del Protocolo Adicional, independientemente de haberse apegado al procedimiento de determinación de oficio previsto en el código fiscal de la provincia, configura un vicio grave de nulidad. Esa falta de un elemento esencial para la validez del acto administrativo reglado por el régimen general, como el procedimiento previo, (art. 96, ley 3460), que importa además, una clara violación de un mandato expreso del régimen jurídico especial - leyes-convenio entre Nación y provincias- que integra el derecho local (en particular, como vimos más arriba, los arts. 24, sgtes. y cc. del Protocolo Adicional regulado por RG 1/2006), determina la nulidad de la Resolución 825/2010 de conformidad con el art. 175, incisos e), m) y n) de la ley 3460.

Aun cuando el Estado pueda argüir que dispuso, en forma expresa, la notificación de la determinación de deuda que afectaba la distribución interjurisdiccional, en los términos previstos en el art. 87 de la RG 1/2006, cabe

reiterar, que dicha comunicación no tiene por objeto una fiscalización conjunta, sino, la mera posibilidad de controvertir la determinación efectuada unilateralmente y tampoco se ha demostrado su cumplimiento.

La cuestión de la debida distribución de la base imponible, habilitada como consecuencia del efecto retroactivo de la declaración de nulidad propuesta, constituye el eventual objeto de tratamiento en el marco del protocolo y una decisión judicial al respecto, en esta instancia, la sustraería de la órbita de competencia convenida por las partes suscriptoras del Convenio Multilateral (confr. artículos 17, inc. e, y 25; y artículo 4º del PACM), por o que, no corresponde pronunciarse al respecto.

B) Entre los efectos del Protocolo, además del sistema de compensación, está la potestad de aplicar intereses y multas, habilitándola el art. 1º, a partir de seguirse el procedimiento allí establecido. De allí que la actora impugnara la fijación de ambos ante la negativa expresa a seguir el sistema de compensación, citando a los fiscos interesados, como CABA en el caso concreto. Además de su prescripción.

La omisión de examinar la cuestión en el momento procesal oportuno, privó a la actora, es cierto, de la posibilidad de revisar un punto sustancial de la litis, en el que fundó su derecho para oponerse a la condena de la que fue objeto (Fallos: 267:354; 278:168).

Resulta ineludible, en esa tesitura, aplicar el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Alpha Shipping S.A." (Fallos: 346:103), considerando que la multa aplicada es de carácter penal pues, aun cuando puede existir un interés de tipo fiscal en su percepción, ello no altera - ha dicho - su naturaleza principalmente punitiva, de donde se deriva la aplicabilidad de los principios y reglas del derecho penal, conforme art. 4º del Código Penal. (Fallos: 288:356). Y recordar que estos principios y reglas son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate, por lo que corresponde estar a las disposiciones de ese cuerpo normativo (Fallos: 335:1089).

Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la actora y anular, en consecuencia, la sentencia 681 de la Excma. Cámara de Apelaciones con competencia administrativa y electoral; admitiendo, simultáneamente, las pretensiones de la actora, declarando prescriptas las diferencias determinadas respecto de los anticipos del impuesto en concepto de ingresos brutos desde enero de 2002 a marzo de 2005 inclusive; anulando la resolución 825/2010 y demás actos administrativos dictados en consecuencia, condenando al Estado de la Provincia de Corrientes a devolver las sumas percibidas por la DGR tanto en concepto de diferencias, como de intereses y multa, con más los intereses respectivos hasta su efectivo pago, conforme la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (Fallos: 328:1569:329:4826 y 334:1472, entre otros). ASI VOTO.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE DOCTOR GUSTAVO SANCHEZ MARIÑO, dice:

Que adhiero al voto de la Doctora María Eugenia Sierra de Desimoni, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE DOCTOR DIEGO ROBERTO NUÑEZ HUEL, dice:

Que adhiero al voto de la Doctora María Eugenia Sierra de Desimoni, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.

A LA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA MINISTRA SUBROGANTE DOCTORA ANA DEL CARMEN FIGUERERO, dice:

Que adhiero al voto de la Doctora María Eugenia Sierra de Desimoni, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO SUBROGANTE DOCTOR JUAN JOSÉ COCHIA, dice:

Que adhiero al voto de la Doctora María Eugenia Sierra de Desimoni, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.

En mérito del presente Acuerdo, el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

1º) Hacer lugar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la actora y anular, en consecuencia, la sentencia N° 681 de la Excma. Cámara de Apelaciones con competencia Administrativa y Electoral. 2º) Admitir, simultáneamente, las pretensiones de la actora, declarando prescriptas las diferencias determinadas respecto de los anticipos del impuesto en concepto de ingresos brutos desde enero de 2002 a marzo de 2005 inclusive. 3º) Anular la resolución 825/2010 y demás actos administrativos dictados en consecuencia. 4º) Condenar al Estado de la Provincia de Corrientes a devolver las sumas percibidas por la DGR tanto en concepto de diferencias, como de intereses y multa, con más los intereses respectivos hasta su efectivo pago, conforme la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (Fallos: 328:1569:329:4826 y 334:1472, entre otros).

5º) Insertar, registrar y notificar.-

Dra. MARIA EUGENIA SIERRA de DESIMONI

PRESIDENTE SUBROGANTE

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA CORRIENTES

Dr. GUSTAVO SANCHEZ MARIÑO

MINISTRO SUBROGANTE

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA CORRIENTES

Dr. DIEGO ROBERTO NUÑEZ HUEL

MINISTRO SUBROGANTE

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA CORRIENTES

Dra. ANA del CARMEN FIGUEREDO

MINISTRO SUBROGANTE

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA CORRIENTES

Dr. JUAN JOSE COCHIA

MINISTRO SUBROGANTE

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA CORRIENTES



Dr. JUAN MANUEL RODRIGUEZ  
SECRETARIO JURISDICCIONAL Nº 1  
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA CORRIENTES